



Andrés Buitrago Orozco
A B O G A D O

Señor Juez:
Juzgados Administrativos del Valle (R)
E. S. D.

ANDRES FELIPE BUITRAGO OROZCO, mayor de edad y vecino de Buga, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.480.194 de Buga (V), portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 184.378 del C.S.J., actuando como apoderado judicial de la demandante del proceso de la referencia me permito, según poder adjunto que en su nombre y representación legal me confirió la Señora ADRIANA MARIA BARRERA RAMIREZ, de conformidad con el poder adjunto, en forma comedida presento Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Nación – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS representada la doctora Paula Gaviria Betancur o quien haga sus veces, mayor de edad, domiciliado en la Carrera 6 # 14-98 piso 4 Edif. Parque Santander - Bogotá para que previos los trámites legales del proceso ordinario me sean concedidas las pretensiones incoadas en esta demanda, previos los siguientes::

DESIGNACION DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES

Demandante

Nombre: Adriana María Barrera Ramírez
N° De C.C.: 1.115.072.273

Demandado

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Dirección: Carrera 6 # 14-98 piso 4 Edif. Parque Santander - Bogotá

Representante legal

Nombre: Paula Gaviria Betancur

Apoderado de la Demandante:

Nombre: Andrés Felipe Buitrago Orozco
N° De C.C.: 94.480.194 de Buga (V)
N° De T.P.: 184.378 CSJ
Domicilio: Carrera 9 # 14-66 de Buga
Teléfono: 3164056027



Andrés Buitrago Orozco
A B O G A D O

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO

PRIMERO: La presente demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se da porque la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS no ha dado respuesta a los recursos de Reposición y en subsidio de apelación notificada el 15 de octubre de 2015 respecto de la decisión tomada por la Directora Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante Resolución No. **2014-458025 del 07 de Mayo del 2014**, con la cual se me dio respuesta a la solicitud de reparación sobre el hecho victimizante de homicidio de mi compañero permanente **WEYMAR AGUIRRE PEREZ**, por las razones que expongo a continuación:

SEGUNDO: Dentro de la declaración que rendió mi mandante en la Personería Municipal de Guadalajara de Buga manifestó que su compañero permanente **WEYMAR AGUIRRE PEREZ** para la fecha de los hechos, año 2008 iba a completar un año de vivir con ella y su hijo en Caucasia al lado del Parque El Palmar, Antioquia, como es de notorio conocimiento es una zona roja por la continua presencia y activa guerra de entre estos grupos armados al margen de la ley, recuerda que día a día habían muertos de ambos bandos y ellos eran los que mandaban en la zona, era muy poca la presencia de la fuerza pública, por lo que como lo dijo en la declaración esta segura que la muerte fue perpetrada por los grupos armados que operaban en la zona, mas exactamente los paramilitares que fueron los que amenazaron a su esposo y al ayudante tildándolo de informante y que no lo querían volver a ver por la zona ya que él se recorría toda la zona montañosa y ya era bastante conocido.

TERCERO: De igual manera **solicito** a la Unidad de Víctimas se tenga en cuenta la declaración completa y no solo este aparte **(...) Se encontraba trabajando en el barrio El Palmar de este municipio vendiendo y distribuyendo la mercancía... lo abalearon muriendo de inmediato (...)** con el cual se le niegan la inclusión al registro único de víctimas RUV presuntamente porque no se enmarca en el artículo 3 de la ley 14488 de 2011.

CUARTO: Solicito se tenga en cuenta la **DECLARACIÓN COMPLETA** rendida ante la Personería Municipal de Guadalajara de Buga el día 05 de Noviembre del año 2013.

“El día 30 de Octubre de 2008 fue asesinado mi compañero WEYMAR AGUIRRE PEREZ en el municipio de Caucasia departamento de Antioquia, Barrio El Palmar su actividad la desempeñaba en esta región como comerciante, se movilizaba en los distintos barrios y zonas rurales de este municipio. PREGUNTA: Sabe si la víctima recibió amenazas o tenía problemas con alguien. RESPUESTA: Si el tenía amenazas donde lo tildaban de militante pues como muchos el se desplazaba a las zonas rurales a vender su mercancía. PREGUNTA: Como ocurrió el homicidio de la víctima. RESPUESTA: Se encontraba trabajando en el Barrio El Palmar de este



Andrés Buitrago Orozco

ABOGADO

municipio vendiendo y distribuyendo la mercancía cuando fue interceptado por hombres que se encontraban en un vehículo campero y lo abalearon muriendo de inmediato. PREGUNTA: Que pudo haber motivado el homicidio. RESPUESTA: Como lo dije anteriormente el ya había sido amenazado por los grupos armados paramilitares y en varias ocasiones le dije que nos fuéramos para otro lado, pero el me decía que aquí le iba muy bien y por su terquedad nos sucedió este hecho. PREGUNTA: Sabe si otras personas resultaron afectadas en este mismo hecho. RESPUESTA: Si el ayudante que el tenía para ayudarlo a repartir la mercancía sufrió tres disparos del cual se logró salvar milagrosamente. PREGUNTA: Sabe quienes fueron los posibles autores intelectuales y materiales de este hecho. RESPUESTA: Fueron los paramilitares los que le quitaron la vida a mi compañero. PREGUNTA: Que ente nacional o territorial conoce de este hecho. RESPUESTA: Conoce la Fiscalía del Municipio de Cauca Antioquia (...)"

QUINTO: teniendo en cuenta que bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que ésta proceda a relevarla de la carga de la prueba y en caso de duda se tendrá por dicho lo manifestado por la víctima que es la parte débil, a **manera de conclusión**, solicito que, como garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral se tenga en cuenta esta declaración completa donde bajo la gravedad de juramento informó que la muerte de su esposo presuntamente pudo haber sido por este grupo paramilitar que controlaba la ciudad a su manera, no había nada por encima de ellos, mataban selectivamente.

SEXTO: Solicito que sea el Estado a través de sus entes y cruce de información quienes le corresponda descubrir la verdad, por lo que es necesario que el Estado realice la **PRUEBA DE REFERENCIA O DE CONTEXTO** de la zona a través de las diferentes Bitácoras que tiene el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el archivo general de la MOE en el Valle del Cauca y demás fuentes de consulta que den certeza con relación al orden público del Departamento y encuentren la estadística oficial del periodo de estudio (2002), (Anexo 1)

SEPTIMO: Con la presente conciliación lo que se pretende es que se le proteja el derecho fundamental a la igualdad a **SER INCLUIDA** dentro del Registro Único de Víctimas después de que verifiquen en todas las bases de datos de la entidad que la muerte de mi esposo tuvo relación con grupos armados más concretamente paramilitares. Y como consecuencia de lo anterior se pague la indemnización de reparación administrativa



Andrés Buitrago Orozco

ABOGADO

ANTECEDENTES

No alcanzaron los paramilitares a desmovilizarse en esta región antioqueña, cuando ya algunos de sus integrantes se rearmaron y el terror volvió a ser el amo del territorio.

La desmovilización no sirvió para nada”, afirma Felipe*, un administrador de fincas del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, refiriéndose al proceso de dejación de armas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “El 90 por ciento de los desmovilizados que conozco regresaron a la guerra y mire cómo nos tienen, de trasteo, porque aquí no se puede vivir”.

Felipe habla mientras su esposa Gloria* termina de empacar los pocos bártulos que quedaron por fuera de cajas y costales. Al día siguiente abandonaron el pueblo y se trasladaron a Tarazá, donde viven sus hijos. Se van por las amenazas que han recibido desde que reclamaron unas tierras que les expropiaron hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc en 2000. También porque no han podido ver a sus hijos, pues los grupos armados ilegales prohíben los viajes frecuentes entre un municipio y otro en esta zona de Antioquia. Quienes los hacen son considerados sospechosos.

Para salir de Cáceres, Felipe tuvo que hablar con el jefe urbano de ‘los Rastrojos’, quien tiene la potestad de permitir o no la salida de los pobladores. También tuvo que conversar a un jefe de ‘Las Águilas Negras’ en Tarazá, para que lo dejaran llegar sin ningún problema. Ambos grupos están enfrentados desde hace varios años y cada cual controla de manera estricta los territorios que domina.

“Así están las cosas en el Bajo Cauca –se lamenta el labriego. Estamos en una tierra donde las leyes son las del más fuerte y la del silencio. Aquí vivimos rodeados de unas bandas emergentes que tienen todo el poder”.

¿Pero quiénes tienen tanto poder y han aterrado los últimos tres años a Felipe, a su esposa y a más de 250 mil habitantes que tiene el Bajo Cauca antioqueño? Se trata de aquellos hombres armados que se quedaron en los territorios conquistados a sangre y fuego por los paramilitares de antaño, y heredaron sus prácticas de terror, sus negocios, su injerencia en gobiernos locales y sus armas. Con esa herencia de sangre han vuelto a reclutar a muchos desmovilizados de las viejas estructuras de las Auc que se habían comprometido a dejar las armas bajo los acuerdos con el Gobierno Nacional firmados en julio de 2003.

Desde 1998 los bloques paramilitares Mineros y Central Bolívar asolaron esta subregión antioqueña, y de manera paralela, persiguieron a las guerrillas y consolidaron sus estrategias de narcotráfico. También tuvieron influencia en el Bajo Cauca antioqueño, el ‘Bloque Héroes de Tolová’, el ‘Frente Mojana’ y la llamada ‘Casa Castaño’.

La presencia de esa fuerza paramilitar se debía a cuatro razones: combatir a las



Andrés Buitrago Orozco
A B O G A D O

guerrillas del Epl, las Farc y el Eln que extorsionaban y secuestraban; hacerse a una tajada de los ricos negocios de la zona: oro, ganadería, madera, y por supuesto, al más lucrativo de todos, el de la producción de coca. En esa zona, cuando llegaron las Auc, había extensos cultivos de hoja de coca, profusión de entables para preparar clorhidrato de cocaína y facilidades de exportación ilegal del alucinógeno por su cercanía al mar Caribe. Crecieron gracias a la crónica debilidad institucional, a la complicidad de actores locales y al terror a sus armas.

Una vez desmovilizadas las Auc, proceso finalizado en agosto del 2006, comenzó la disputa entre aquellos que no aceptaron desmovilizarse y que decidieron reorganizarse para mantener buena parte de las estructuras criminales y continuar con el control de recursos naturales, políticos, militares y estratégicos que tenían. Estos tenían base en la explotación minera, la compra-venta de minas de oro, el narcotráfico, la extorsión, el despojo de tierras, el cobro de vacunas, el contrabando de gasolina y los retenes en las carreteras veredales.

Quienes conocen la región dicen que la nueva guerra se inició en enero de 2008: “Para esa época comenzaron a enfrentarse dos grupos, la banda de ‘Don Mario’ y un grupo que organizó alias ‘Sebastián’, un ex integrante del ‘Bloque Central Bolívar””, dijo un periodista que ha recorrido el Bajo Cauca.

Ambas organizaciones estaban lideradas por dos de los herederos de las Auc. De un lado, alias ‘Don Mario’, cuyo nombre real es Daniel Rendón Herrera, hermano de Fredy (‘El Alemán’), quien comandó el ‘Bloque Élmer Cárdenas’ en el Urabá. Una vez esta estructura abandonó las armas, en agosto de 2006, Rendón montó una fuerza ilegal no sólo para copar los espacios que dejó su hermano, sino para expandirse hacia buena parte de Antioquia y el norte del país.

En Caucasia ha cogido fuerza la versión no confirmada oficialmente según la cual alias ‘Don Mario’ le “compró” el monopolio de los negocios criminales en parte de la zona del Bajo Cauca y del sur de Córdoba a Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, quien comandó el Frente Mojana de las Auc.

Las huestes de alias ‘Don Mario’ llegaron al Bajo Cauca procedentes del norte de Urabá antioqueño, donde gestó su proyecto de expansión criminal. Conocidos inicialmente como ‘Los Traquetos’, esta organización armada ilegal pasó a llamarse ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, para luego conocerse como ‘Los Urabeños’, quienes actúan en alianza con otras estructuras conocidas como ‘Águilas Negras’ y ‘Renacer’ en diversas regiones del país.

Su enemigo fue alias ‘Sebastián’, cuyo nombre real es Ángel de Jesús Pachecho Chancí, forjado en las filas del ‘Bloque Central Bolívar’, que creó y comandó Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Sabía dónde quedaron las caletas de armas, municiones y conocía los negocios ilegales y se dedicó a rearmar un grupo que continuara con el dominio en los territorios dejados por sus antiguos compañeros de armas y a ampliar su radio de acción para controlar áreas estratégicas para el tráfico de drogas y la explotación minera.



Andrés Buitrago Orozco
ABOGADO

“Ellos lideran unos grupos que se disputan dos corredores esenciales para el narcotráfico”, explica el periodista consultado. “De un lado, la ruta que va de Caucasia hacia el Sur de Bolívar atravesando El Bagre, Zaragoza y Segovia; del otro, la que lleva al Nudo del Paramillo, y por allí hacia el sur de Córdoba”. Mientras que por la primera se llega al río Magdalena, desde donde se puede acceder a los puertos marítimos de los departamentos de Atlántico y Magdalena; por la segunda se llega a los puertos de Sucre y Córdoba sobre el mar. Ambas rutas son clave para la exportación de cocaína a los mercados internacionales.

“Cuando estos dos grupos comenzaron la guerra, se decía que eso era un problema entre ellos y la gente desestimó el asunto, pero esa confrontación creció y aparecieron nuevos grupos”, explica el periodista. Llegaron a la subregión ‘Los Paisas’, un brazo armado de la llamada ‘Oficina de Envigado’ de la facción que domina Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, otro de los herederos de las Auc; ‘Los Rastrojos’, que fueron el brazo armado de un jefe del narcotráfico en el Valle; y una disidencia del Bloque Mineros conocida como ‘Águilas Negras’, que comanda Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, un ex paramilitar que estuvo al lado de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, quién fue el jefe de las Auc en el municipio de Tarazá y buena parte de la zona cordillerana del Bajo Cauca.

De acuerdo con defensores de derechos humanos que solicitaron la reserva del nombre, la confluencia de grupos armados ilegales en una zona relativamente pequeña derivó en que unos se aliaran con otros, pero también se recrudecieron las batallas entre otros. “Alias ‘Sebastián’ se unió a ‘Los Rastrojos’ y a ‘Los Paisas’”. A la banda de ‘Don Mario’, que ahora se conoce como ‘Los Urabeños’, se aliaron los ex integrantes del bloque Mineros, quienes se conocen como ‘Águilas Negras’”. Las autoridades calculan que podría haber por lo menos mil hombres en armas.

Las primeras alertas institucionales al respecto las dio la Defensoría del Pueblo. En dos informes de riesgo de 2007 y 2008 describió lo que se venía incubando en esa subregión de Antioquia.

De acuerdo con el Informe de Riesgo N. 023-07, “tras el proceso de desmovilización del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar grupos armados ilegales que se conformaron con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, entre las que se encuentran las autodenominadas ‘Águilas Negras’, están relevando el poder hegemónico de las autodefensas del Bajo Cauca Antioqueño, haciendo uso sistemático de las mismas prácticas intimidatorias del paramilitarismo, que irrumpen violentamente en la cotidianidad de las veredas y corregimientos de Cáceres regulando la vida económica, política y social. Es posible que no se tenga que hablar de nuevas estructuras sino de un reciclaje o de una nueva versión de las mismas que ya actuaron allí”.

Al año siguiente, en un segundo informe de riesgo, el N. 016-08, la Defensoría analizó la situación de los municipios de Briceño y Valdivia, en el Norte, y de Tarazá, en el Bajo Cauca, y alertó sobre “reductos no desmovilizados de las Auc,



Andrés Buitrago Orozco

ABOGADO

miembros desmovilizados del Bloque Minero y Bloque Central Bolívar y narcotraficantes, que conformaron grupos armados ilegales pos desmovilización de las Auc con el objeto de consolidar lo adquirido, representado en grandes extensiones de tierra, apropiación del recurso minero y control sobre actividades del narcotráfico”.

Documentos de análisis realizados en 2009 para la Presidencia de la República definieron estos nuevos grupos como “fuerzas más o menos estructuradas de antiguos integrantes de organizaciones armadas ilegales y algunos grupos emergentes, y están presentes en toda la zona. Tienen diversos modos de operación, que incluyen servicios permanentes o temporales de control territorial y de rutas, asesinatos por contrato o ejecución de acciones delictivas por iniciativa propia. Con frecuencia protagonizan enfrentamientos por el control de negocios ilícitos y el dominio territorial”.

Tales análisis coinciden con lo consignado en el II Informe Nacional de Desmovilización, Desarme y Reinserción de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en el que se confirma la presencia de grupos rearmados en el Bajo Cauca antioqueño: “Si bien se desarticularon las estructuras de las Auc, perviven con particular fuerza expresiones residuales del paramilitarismo y diversos grupos armados ilegales y bandas mafiosas y delincuenciales, por lo regular estrechamente ligados al narcotráfico”.

Esta guerra ha tenido diversos impactos, uno de ellos es el económico. Felipe tiene claro el problema: “Afortunadamente estaba pagando arriendo, porque donde la casa fuera propia sería un problema”. Y para sustentar las consecuencias que ha tenido la confrontación expone dos ejemplos: “Hace seis años me ofreció un señor una casa en Caucasia por 120 millones de pesos y sabe por cuánto me la volvió a ofrecer hace dos meses, por 40 millones. En Tarazá, propiedades de 100 millones de pesos las están dejando a 15 millones. Y no hay quién las compre”.

Lo que relata este administrador de fincas lo refrendan los comerciantes de todo tipo de negocios, quienes también han salido perjudicados. Uno de ellos señala que “muchos cerraron sus locales y se fueron, no aguantaron el ritmo de las extorsiones y las amenazas. Los que nos quedamos tratamos de aguantar, pero es difícil, hay mucha presión. Y nadie quiere invertir en Caucasia”.

Basta visitar en la noche la llamada zona rosa de Caucasia, en la avenida Pajonal, para apreciar el impacto de la guerra. Allí se concentran discotecas, bares y restaurantes que antes del 2008 vivían una época de esplendor económico derivado del narcotráfico. “Pero desde enero de ese año, la situación cambió radicalmente. La afluencia de público se fue reduciendo y muchos negocios tuvieron que cerrar”, dice un administrador. Esa situación también se vive en los municipios de Tarazá, Cáceres y Nechí.

Este comerciante indica que todo se debe al miedo generalizado de la gente. Y es que existen motivos de peso para sentir zozobra: durante el 2010 se registraron



Andrés Buitrago Orozco
ABOGADO

más de 70 atentados con granadas de fragmentación y explosivos en Cauca y Tarazá. “Se lanzaron contra negocios donde se presumía que había integrantes de una u otra banda. Además, contra casas de familia”, precisa el periodista, quien fue víctima de uno de esos ataques por sus constantes denuncias.

Los homicidios en esa subregión antioqueña 2008 y 2010 se han mantenido en niveles muy superiores a los de años atrás. Según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, en el 2007, antes de iniciada la confrontación, se presentaron 121 asesinatos en los seis municipios del Bajo Cauca; en el 2008, esa cifra se incrementó a 232. Desde el 2009 han comenzado a disminuir los homicidios, de 220 ese año a 200 en 2010.

Pero la guerra desatada en el Bajo Cauca hace parte de las disputas que los herederos de las Auc han librado en diversas regiones del departamento, incluido el Valle de Aburrá. Voceros de una organización no gubernamental que trabaja en Cauca promoviendo la defensa de los derechos humanos han advertido desde el año pasado las conexiones criminales de esta ciudad con la capital antioqueña.

“Muchos de los sicarios que actúan en el Bajo Cauca vienen de Medellín. Allí los entrenan y los envían a trabajar en nuestros pueblos –afirma uno de los directivos de esta organización. Varios de esos jóvenes se regresan a la ciudad luego de hacer ‘el trabajo’, pero otros se quedan y se incorporan a las organizaciones de uno u otro grupo. Es un reclutamiento constante”.

Al Bajo Cauca llevan a los que se “destacan” en las calles de Medellín. “A quienes son muy buenos acá los ascienden y los llevan a Cauca a trabajar allá”, afirma una fuente de los integrantes de bandas de la ciudad que han sido cooptadas por alias ‘Valenciano’, quien fue cercano al ex paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Alias ‘Valenciano’ tiene sus intereses en el Bajo Cauca. Su intención es fortalecer las rutas del narcotráfico hacia la costa norte que antes tenía alias ‘Don Berna’. Pero, para lograrlo y, además, para soportar las arremetidas de la gente de alias ‘Don Mario’ y los ex integrantes del Bloque Mineros, ha hecho alianzas con ‘Los Rastrojos’. “De ahí que necesite gente con experiencia”, dijo un joven, quien pidió no ser identificado.

Para contrarrestar la criminalidad en el Bajo Cauca, la Presidencia de la República creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, mediante el Decreto 2374 del 1° de julio del 2010, que inicialmente operará por un año y que permite “la creación de jueces de garantías con competencia regional y nacional, se designan funcionarios con competencia nacional por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Judicial y DAS, y se autorizan los ajustes presupuestales y apoyos logísticos necesarios para su funcionamiento”.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, la estrategia es la adecuada porque “promueve el trabajo interinstitucional



Andrés Buitrago Orozco
A B O G A D O

de los organismos de seguridad y de justicia, el cual, creemos firmemente, ayudará a dar solución al problema de seguridad del Bajo Cauca antioqueño”.

No obstante, la estrategia parece ser insuficiente. Al respecto, la Defensoría del Pueblo llamó la atención en su Informe de Riesgo N. 023-07: “El escalonamiento del conflicto armado, el narcotráfico, la escasa inversión social y productiva y la pobreza en que se encuentran sumidos los pobladores específicamente los del sector rural, son factores constitutivos de un ambiente social explosivo, cuya única forma de control no puede ni debe ser exclusivamente el fortalecimiento de la fuerza militar del Estado en la región, sino que ello debe comprometer a un conjunto de instituciones estatales que brinden una respuesta integral en materia social, económica y humanitaria”.

Para atacar los problemas sociales, la Gobernación de Antioquia creó el Centro de Coordinación Regional para el Bajo Cauca como estrategia de consolidación de la seguridad, a través de los cuales se impulsan planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, así como proyectos de sustitución de cultivos de hoja de coca.

Pero Felipe no cree mucho en estas acciones institucionales. “El Bajo Cauca tiene un atraso de 40 años –dice—. Es una zona minera y ganadera, pero con muy poca ayuda. Faltan programas agrarios y los que traen no los enseñan bien. Mucha gente ha perdido con el cacao porque no lo ha sabido cultivar. ¿Entonces qué pasa? Llegan los señores narcotraficantes y ofrecen plata para trabajar en ilegalidades y la gente acepta porque nadie se deja morir de hambre”.

Otro aspecto de la institucionalidad que le preocupa a Felipe es la relación de la Policía con los grupos criminales. Según él, hay sectores permeados por la ilegalidad: “A los policías les pagan un sobresueldo. Y se lo digo consciente de lo que le estoy diciendo. Llevo diez años viviendo en Cáceres y he tenido algunos policías muy confidenciales. Uno de ellos me decía que quién no va a querer un sobresueldo. Varios de ellos cuidan a los señores que están por ahí”.

Al igual que este administrador de fincas, pocos en la población los que confían en las autoridades. Incluso el documento preparado por analistas para la Presidencia de la República reconoció que la “protección policial tiene debilidades”, entre otras razones por “desconfianza de los ciudadanos”.

Felipe y su mujer saben muy bien quién heredó el poder de las Auc. “No fue el Estado, de eso estoy seguro”, afirma el hombre. Por eso tuvieron que pedirle permiso a uno de los jefes urbanos de ‘Los Rastrojos’ para que los deje trastearse hacia Tarazá, donde otro comandante los autorizó a llegar. Esas son las lamentables herencias que deja la guerra en el Bajo Cauca.



Andrés Buitrago Orozco
ABOGADO

PRETENSIONES

Pretendo con la presente demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con base en los aspectos fácticos y jurídicos lo siguiente:

1-. Se sirva la Nulidad absoluta de la Resolución No. 2014-458025 del 07 de Mayo del 2014, y se dé el Restablecimiento del Derecho de mi mandante a ser incluida en el RUV por la muerte de su esposo WEYMAR AGUIRRE PEREZ.

2-. Se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS a pagar la indemnización de la Reparación Administrativa, la suma de CUARENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

3-. Que se declare que la muerte de WEYMAR AGUIRRE PEREZ se dio como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos.

ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE SE EJERCERÍA

La acción contencioso administrativa que se ejercería es la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Artículo 138 del C.C.A.

PRUEBAS Y ANEXOS

Me permito adjuntar a la presente demanda, los siguientes documentos:

- 1) El poder para la actuación,
- 2) Copia de los Criterios de valoración de las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas
- 3) Copia de la petición cursada a la entidad estatal contratante.
- 4) Copia de la resolución No2014458025 del 07 de mayo de 2014
- 5) Copia de los Recursos y de las notificaciones personales
- 6) Copia de la Conciliación pre-judicial ante la Procuraduría

NOTIFICACIONES

Las de mi Poderdante como las del suscrito, las recibiré en la secretaria de su despacho o en mi oficina ubicada en la carrera 9 No. 14 – 66 de Buga, Cel. 316 405 6027. E-mail: abcontactojuridico@gmail.com



Andrés Buitrago Orozco
ABOGADO

A la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS en la Carrera 6 # 14-98 piso 4 Edif. Parque Santander – Bogotá. E-mail: no tengo conocimiento

Del Señor Juez

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE BUITRAGO OROZCO
CC. 94.480.194 de Buga
T.P. 184.378 CSJ